

Santiago, doce de octubre de dos mil veintidós.

**Vistos:**

Comparece don Alfredo Cerri Grilli, Fiscal Adjunto del Ministerio Público y recurre de nulidad en contra de la sentencia pronunciada en causa RUC N°2000764868-6, de fecha 8 de agosto de 2022, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a los encausados Christopher Andrés Fernández Cortés y Eladio Máximo Huecha Marín, de ser autores del delito de robo con violencia e intimidación, descrito y sancionado en el inciso primero del artículo 436 del Código Penal, y de la infracción al artículo 318 del mismo cuerpo legal, que habrían sido cometidos el 28 de julio de 2020, en la comuna de Conchalí.

Invoca al efecto la causal de nulidad contemplada en el artículo 374 letra e) en relación a los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal.

Pide en definitiva que se acoja el presente recurso, y se declare la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia dictada en ella, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y se ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para la realización de un nuevo juicio.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes, fijándose la lectura de la sentencia para el día de hoy.

**Considerando y oídos los intervinientes:**

**Primero:** Que, la recurrente sostiene que el fallo impugnado ha incurrido en el vicio ya citado que ha redundado en que, mediante una valoración apartada de los parámetros que exige el artículo 297 del Código Procesal Penal, ha resuelto absolver a los imputados CRISTOPHER ANDRÉS FERNÁNDEZ CORTÉS y ELADIO MÁXIMO HUECHA MARÍN.

A juicio del Ministerio Público, la sentencia recurrida ha incurrido en el motivo absoluto de nulidad a que alude el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c) y ambas normas en relación a su vez con el artículo. 297, todas disposiciones del Código Procesal Penal, en lo que se refiere a la infracción del principio de la razón suficiente.

Al efecto, expresa, el principio de la razón suficiente se ha formulado en los siguientes términos “Ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”, lo que se relaciona con el raciocinio que busca fundamentar el conocimiento o con un criterio formal de fundamentación. Al buscar la razón suficiente del juicio, se debe investigar el apoyo o fundamento material de lo enunciado, lo que equivale a indagar en la prueba material vertida en el proceso, ello por cuanto sobre la base de la prueba rendida en juicio el sentenciador extraerá



conclusiones relativas a hecho acreditado, participación, circunstancias anexas al hecho, etc., que tendrán como consecuencia una decisión de absolución o condena.

De esta manera, el tribunal deberá emitir un razonamiento fundado en conclusiones adecuadamente deducidas de la prueba sometida a su conocimiento y valoración, por lo que toda decisión del órgano jurisdiccional debe contener argumentos que la justifiquen, para ser entendida y aceptada por los intervinientes permitiendo de esta forma la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que arribe.

Sostiene que es precisamente aquí donde se produce la infracción que motiva la interposición del presente recurso por la causal que se invoca. En efecto, tal como se ha planteado, cuando se va en busca de la razón suficiente de una conclusión fáctica debe determinarse el apoyo o fundamento material de lo enunciado dentro de la prueba del juicio, no de elementos externos ni elementos que no han sido puestos en conocimiento de los jueces de fondo. En consecuencia, el razonamiento probatorio del tribunal, de naturaleza inductiva, debe estar constituido por inferencias adecuadamente extraídas de los elementos de prueba aportados por los intervinientes y derivarse de la sucesión de conclusiones que, en base a ellos, se vayan determinando, además, debe ser concordante y constringente, en cuanto cada conclusión negada o afirmada, responda adecuadamente a un elemento de convicción del cual se puede inferir la conclusión mas no de elementos externos o inexistentes en los medios de pruebas rendidos en juicio. En este sentido, la visión probatoria del principio de la razón suficiente se entiende como la opción epistémicamente correcta con el objeto de evitar la simple certeza subjetiva de los jueces en relación con los hechos. Así, este principio lógico expresa un grado de ratificación, en virtud del cual la hipótesis que sustenta la acusación debe ser ante todo confirmada por una pluralidad de pruebas o datos probatorios, conectando esas pruebas con la hipótesis, de manera de poder concluir la veracidad de esta.

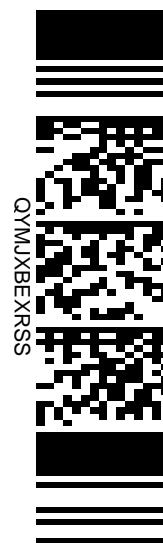
Por otra parte, conforme el artículo 130 letras C, D y F del Código Procesal Penal, los imputados CRISTOPHER ANDRÉS FERNÁNDEZ CORTÉS, ELADIO MÁXIMO HUECHA MARÍN, junto a tres imputados adicionales fueron detenidos en contexto de flagrancia cuando intentan evadir un control vehicular en un vehículo marca Lexus sustraído a su dueño clandestinamente desde un taller mecánico, con las especies sustraídas a la víctima en tiempo casi inmediato, con el revólver y un cuchillo utilizados para golpear a la víctima en la sustracción, víctima que los sindicó en el lugar como autores del robo y el imputado CRISTOPHER ANDRÉS FERNÁNDEZ CORTÉS es posicionado en el banco con las cámaras de seguridad, momentos antes del robo de la víctima, cumpliendo además la circunstancia establecida en el artículo 454 del Código Penal.



Ahora bien, continúa, para demostrar la circunstancia señalada precedentemente, declaró en estrado la víctima JUVENAL MARTINEZ, que dio cuenta del robo sufrido, los tiempo inmediatos y la recuperación de las especies que estaban en poder de los imputados; la declaración del testigo RODRIGO ESPINOZA quien dio cuenta que el vehículo no es utilizado por uber ni servicios de radio taxis, siendo utilizado particular y actualmente se encontraba en un taller mecánico indicando que no ha sido facilitado para ningún ilícito siendo sacado del taller clandestinamente para esos fines y se adjunta certificado de dominio del vehículo que acredita que es de su propiedad; declaración de CONSTANZA TRIVIÑO, que da cuenta que el vehículo no se encuentra clonado; declaración de los funcionarios de Carabineros de Chile DIEGO HERNANDEZ, MATÍAS MORALES y ALEJANDRO MONSALVE, quienes dieron cuenta del control vehicular, el intento de huir, las especies incautadas, la llegada al lugar de la víctima, la corroboración de su testimonio con las especies incautadas y la verificación del vehículo; declaración del funcionario de Carabineros de Chile EDUARDO CONTRERAS quien da cuenta de la diligencia de concurrir a incautar los videos de las cámaras de seguridad, su análisis, la explicación de la dinámica en el banco, la que es concordante con la víctima, el posicionamiento del imputado con sus vestimentas y el periodo de tiempo, que con los tiempos indicados dan cuenta que a las 12:14 la víctima sale del banco, es asaltada violentamente a las 12:30 y los imputados son detenidos con las especies de la víctima y las armas utilizadas a las 12:55 horas. Lo anterior se suma a la prueba documental, fotográfica y testimonial que da cuenta de la teoría del caso del Ministerio Público sobre la autoría y participación de los imputados en el delito acusado.

Indica que el tribunal en su sentencia no se hace cargo de la prueba en los términos de los límites a la sana crítica y particularmente al principio de razón suficiente, toda vez que sus conclusiones para absolver se basan en un estándar probatorio que no constituye parte de la prueba rendida en la audiencia de juicio oral, lo que es una infracción al debido proceso y a la certeza jurídica, no realizando un análisis de lo rendido en la audiencia de juicio oral al establecer las siguientes conclusiones sobre la prueba rendida:

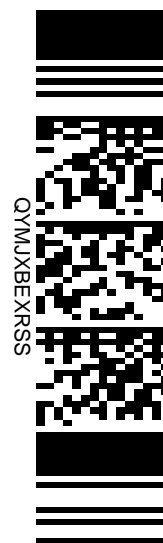
Descarta la importancia de la declaración de la víctima JUVENAL MARTINEZ en el considerando OCTAVO (PÁG. 16): “(...) *Sin embargo, a partir del testimonio de la víctima sólo es posible colegir que fue abordado por tres sujetos en el sector de La Palmilla, quienes premunidos de arma de fuego y un cuchillo logran sustraerle la suma de 4 millones de pesos que momentos antes había retirado del banco, sin que existan antecedentes inculpativos en contra del imputado Fernández Cortés, más que referir que el sujeto que estaba en el banco vestía de negro con verde, ignorando estos sentenciadores si la víctima efectuó algún reconocimiento o le fueron exhibidas las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria, por lo que dicha sindicación de*



vestimentas resulta un antecedente aislado que no encontró corroboración probatoria en ningún otro antecedente, sino que por el contrario, al apreciar los fotogramas exhibidos por la fiscalía al funcionario Eduardo Contreras, se observa a un sujeto al interior del banco con una vestimenta distinta a la mencionada por la víctima, por lo que tampoco es posible vincular sus dichos con lo apreciado en las fotos(...).”. En este aspecto indica que, no se puede determinar diligencia de reconocimiento en los términos exigidos por el tribunal ya que es una hipótesis de flagrancia anteriormente indicada y corroborada con las cámaras de seguridad del banco, vestimentas de los imputados y especies encontradas en poder de los imputados que sí corroboran los dichos de la víctima, siendo dicha circunstancia descartada por el tribunal en base a diligencias investigativas y supuesto inexistentes en el desarrollo del juicio.

Respecto de la declaración del testigo RODRIGO ESPINOZA, el tribunal le resta valor a su testimonio indicando en su considerando OCTAVO (Pág. 17): “(...) Además, conviene resaltar como falencia investigativa, que no se entrevistó al dueño del taller para explicar las razones de por qué el vehículo se encontraba en poder del imputado Huecha Marín, constituyendo un cabo suelto que no pudo ser llenado con la prueba rendida en juicio. (...)”. Ese planteamiento, agrega, es sobre hechos no discutidos ni entregados en juicio, de los cuales desestima la declaración del dueño del vehículo sin tener conocimiento el tribunal si hay investigaciones diversas o diligencias realizadas en dicho fin, o simplemente no se cuestionó la naturaleza del contrato realizado por el dueño del vehículo, el que incluso puede ser por medio de un seguro de automóvil que entrega a un taller diverso el vehículo. Todo eso de plano es descartado por el tribunal desestimando lo declarado por el dueño del vehículo y entregando verosimilitud a los dichos del imputado HUECHA sobre un vehículo de lujo indicando que (CONSIDERANDO CUARTO Pág. 6): “(...) estaba trabajando en empresa radiotaxi rapidito el 28 de julio de 2020, empezó a las 7 de la mañana y alrededor de las 8.30 llega don Cristopher a la central solicitando un servicio y su jefe lo envía a él porque era su turno. (...)” y al mismo interrogatorio de la defensa indica (CONSIDERANDO CUARTO Pág. 7) : “(...)en la empresa de radiotaxi llevaba 5 meses trabajando, no contratado porque no es una central actualizada(...)”. El tribunal ni siquiera se cuestionó que se habla de una central de taxis “rapidito”, donde no se incautó ningún elemento de dicha empresa en el vehículo ni se aportó por la defensa siquiera una foto del lugar porque no existe dicha prueba que corrobore los hechos y la Fiscalía no podía indagar esa versión porque nunca fue entregada en el transcurso de la investigación. Por lo anterior, el tribunal desecha esa prueba bajo cuestionamientos sobre antecedentes que busca encontrar en elementos externos a la prueba rendida en juicio.

Después descarta el testimonio de DIEGO HERNANDEZ bajo la siguiente premisa considerando OCTAVO (Pág. 20 y 21): “(...) Sin embargo, respecto a la



*dinámica de los hechos conviene precisar que solamente se trata de un relato de oídas, pues no presencié el robo con intimidación que sufrió la víctima y la sindicación que hizo ésta de los individuos no fue con detalle, limitándose a referir que la víctima los reconoció como los autores, sin especificar a quiénes reconoció ni se le hizo un reconocimiento por set fotográfico ni si reconoció a los tres que lo abordaron o a los cinco detenidos en conjunto. Ninguna de esas dudas fue preguntada por los intervinientes, quedando como cabos sueltos que no lograron ser llenados con algún medio de prueba. No existiendo una vinculación entre los acusados Huecha Marín y Fernández Cortés con la imputación fáctica descrita en el libelo acusatorio. No pudiendo acreditar el concierto previo entre los cinco enjuiciados ni menos acreditar la supuesta distribución de funciones que señaló el persecutor.(...)”. El tribunal saca conclusiones desde diligencias inconducentes e inexistentes como por ejemplo reconocimiento fotográficos o la clasificación de “testigos de oídas” a dicho funcionarios, lo cual es una conceptualización errónea, en la medida que esos funcionarios fueron quienes controlan a los imputados dentro del vehículo Lexus, quienes intentan darse a la fuga, observan que intentan deshacerse de un arma de fuego, les incautaron a los imputados las especies de la víctima, así como también un revolver y un arma blanca reconocidos por la víctima como elementos utilizados para la comisión del robo con violencia sufrido minutos antes, así como también es la víctima quien indica en contexto de flagrancia que ellos fueron quienes le realizaron el robo a los funcionarios policiales. Es decir, el tribunal se olvida de lo dispuesto en el artículo 130 letras C, D y F del Código Procesal Penal y artículo 454 del Código Penal, exigiendo diligencias investigativas inconducentes, así como no plasmadas en los elementos probatorios ni vertidos en juicio. Misma argumentación es vertida para desechar los testimonios de MATÍAS MORALES y ALEJANDRO MONSALVE.*

Asume el tribunal que lo planteado por HUECHA esta corroborado porque en la prueba documental número 7 se indica CONSIDERANDO OCTAVO (Pág.: 25): “ (...) 7. OFICIO N°1544 de fecha 11 de septiembre de 2020 de la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile. Da cuenta que el imputado Hueche el día de los hechos, mantenía un permiso temporal para compra de insumos básicos. A diferencia del imputado Fernández que no mantiene. Lo anterior permite corroborar la explicación dada por el enjuiciado Huecha que ese día estaba realizando labores como chofer de radiotaxi. (...)”. Ese salto argumentativo del tribunal, no permite entender cómo se llega a una conclusión de dicha naturaleza, cuando el mismo imputado indica que trabaja en una empresa de radiotaxi.

Continuando, la sentencia desacredita el testimonio del funcionario policial EDUARDO CONTRERAS y el análisis del fotograma de las cámaras de seguridad con el comparativo de vestimentas en base a la siguiente conclusión CONSIDERANDO



OCTAVO (Pág. 28): “ (...) Sin embargo, el relato del funcionario en comento tampoco permite establecer la existencia de un concierto previo entre los cinco imputados de esta causa, como planteó el Ministerio Público ni tampoco permite establecer que el acusado Christopher Fernández haya “marcado” a la víctima, pues no se logró corroborar que se hubiese comunicado con otros individuos que estaban en el exterior. Además, conviene precisar que la propia víctima refirió que le llamó la atención la presencia de un individuo en el sector de los estacionamientos, el que incluso estaba apoyado en su camioneta sin moverse hasta que inició la marcha. Ahora bien, dicha información no fue chequeada en la etapa investigativa ni tampoco se obtuvieron cámaras del sector de estacionamiento que hayan dado cuenta de lo informado por la víctima. Por otro lado, también resulta extraño para este Tribunal que la fiscalía no haya exhibido el video de las cámaras de seguridad del interior del banco, ya que con ello se podría haber observado la hora y fecha de ocurrencia de la secuencia, al igual que la dinámica ocurrida dentro de la sucursal. En el mismo sentido, también echa de menos este Tribunal que nadie haya entrevistado a la cajera que atendió al imputado Fernández, pues con ello se podría haber conocido si efectivamente estaba realizando un trámite real o solamente era algo dilatorio para mantenerse dentro del banco. Por último, también resulta extraño que no se haya incorporado ninguna prueba relativa al tráfico de llamadas entre los imputados, pues como se apreció en la fotografía N°1 del set 6, los funcionarios aprehensores incautaron un celular, pudiendo haberse realizado diligencias que vincularan al acusado Fernández con el resto de los detenidos.(...)”. Ese razonamiento no responde a la pregunta ¿por qué la defensa no utilizó esos medios de prueba si se hizo de la prueba del Ministerio Público?. Esa respuesta no se puede responder porque el razonamiento del tribunal se sustenta en prueba no vertida en el juicio oral y por tanto infringiendo el principio de razón suficiente. Es tan importante cuidar no razonar en base a prueba inexistente que se puede caer en errores como que el tribunal no tiene cómo saber que los imputados nunca entregaron las claves de sus celulares ni autorizaron voluntariamente su revisión, lo que sólo con una autorización judicial dificulta la extracción, o el hecho que la defensa de FERNANDEZ con su teoría alternativa podría haber presentado la documentación bancaria aludida o el imputado HUECHA sobre la empresa de radio taxis “rapidito”. Todo eso responde las preguntas que se realiza el tribunal sobre diligencias y pruebas inexistentes en juicio, razonando en base a supuestos y no sobre antecedentes probatorios.

Expresa que para el tribunal, la conclusión de la prueba rendida y no rendida en juicio se puede resumir en el siguiente párrafo del considerando OCTAVO (pág. 25): “(...) A partir de lo anterior, y con el mérito de la misma prueba indicada, no se acreditó más allá de toda duda razonable, la existencia de un concierto previo entre los cinco imputados ni una distribución de funciones, donde el acusado Fernández Cortés



*haya “marcado” a la víctima para que pudiera ser abordada posteriormente. Sino que la única vinculación de ambos imputados es haber estado al interior del vehículo Lexus donde se encontró el dinero sustraído a la víctima y las armas utilizadas por los tres sujetos que lo intimidaron, y la circunstancia que el enjuiciado Cristopher Fernández se encontraba al interior de la misma sucursal del banco a la que concurrió la víctima. Sin embargo, dicha vinculación en ningún caso puede derribar la presunción de inocencia que gozan ambos imputados, máxime cuando la pena solicitada por el Ministerio Público se eleva a 17 años de presidio mayo en su grado máximo. (...)”.*

Con lo planteado y razonado por el tribunal, expresa, la sentencia no cumple con el principio de razón suficiente en su razonamiento porque no elabora una ponderación de la prueba en su función epistémica, olvidándose que ella tiene por finalidad configurarse como un instrumento procesal destinado a descubrir y conocer la verdad de los hechos de la causa, siendo la prueba en juicio oral una herramienta que suministra al sentenciador la información que necesita para establecer los enunciados sobre los hechos que se sustenta la base cognitiva suficiente y adecuada para considerarlos como verdaderos destinados a formular juicios de verdad basado en una justificación racional, lo que configura la certeza jurídica en las decisiones jurisdiccionales basado en antecedentes y no en meros supuestos, incurriendo los sentenciadores en el vicio indicado el que, mediante una valoración apartada de los parámetros que exige el artículo 297 del Código Procesal Penal, tiene como consecuencia la absolución cuestionada.

La infracción denunciada trae aparejado un evidente perjuicio al ente persecutor y a la sociedad toda, cual es la absolución de los acusados CRISTOPHER ANDRÉS FERNÁNDEZ CORTÉS y ELADIO MÁXIMO HUECHA MARÍN, a pesar de encontrarse suficientemente acreditados tanto la existencia del delito investigado como la participación en ellos en los ilícitos acusados.

El error señalado ciertamente ha influido en la decisión a la que arriba el tribunal, error que puede salvarse únicamente con la nulidad del fallo y consecuencialmente del juicio del cual ella emana.

**Segundo:** Que, la causal invocada constituye un reflejo del deber de fundamentación de la decisión por parte de los tribunales penales, única forma de legitimar racionalmente la sentencia, ante las partes y la comunidad.

**Tercero:** Que el fallo penal debe contener una exposición clara, lógica, completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, sean favorables o desfavorables, y de la valoración de la prueba en que fundan sus conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

En atención a la centralidad del juicio oral y su carácter de juzgamiento inmediato de única instancia, se ha sostenido mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia que en el recurso de nulidad el tribunal ad quem no tiene competencia

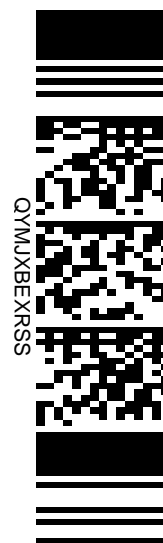


para entrar a revisar ni alterar los hechos del modo como los fijaron los jueces a quo, sin embargo para discernir la concurrencia de la causal en estudio es previo determinar la corrección y legitimidad de la fundamentación empleada por los sentenciadores para dar por establecidos los sucesos de relevancia penal, análisis que puede traer como consecuencia la determinación de una errónea apreciación de la prueba rendida que justifica la realización de un nuevo juicio.

**Cuarto:** Que, se acusó a los encartados por los siguientes hechos: “El día 29 de julio de 2020, en horas de la mañana, los imputados LUIS PATRICIO GUZMAN RIQUELME, SEBASTIAN ALEJANDRO VELIZ VILLABLANCA, JORGE SIERRA MELO, ELADIO HUECHA MARIN y CRISTOPHER FERNANDEZ CORTES, previamente concertados, llegaron hasta el sector bancario de “El Cortijo”, ubicado en la comuna de Conchalí, con el objeto de cometer delitos de robo. En el lugar se distribuyen funciones, ingresando a lo menos uno de ellos, el imputado CRISTOPHER FERNANDEZ CORTES al banco Scotiabank, ubicado en Avenida Américo Vespucio N° 2930, comuna de Conchalí, manteniéndose en el lugar sin realizar trámites, observando los momentos en que la víctima JUVENAL MARTINEZ BUSTOS, de 65 años edad retiraba una gran suma de dinero, marcándolo. La víctima sale del lugar a las 12:14 horas, conduciendo su automóvil, siendo seguido por varias calles por los imputados a bordo de un taxi básico. Aproximadamente a las 12:30 horas la víctima se detiene y estaciona en calle La Palmilla a la altura del número 3932 de la misma comuna, siendo abordado por 3 de ellos, entre los que se encontraba JORGE LUIS SIERRA MELO y SEBASTIÁN ALEJANDRO VÉLIZ VILLABLANCA, quienes premunidos de un arma de fuego y 2 armas blancas, lo intimidan, lo agreden y le exigen la entrega de la chaqueta que mantenía puesta donde se encontraba el dinero, frente a lo cual la víctima le hace entrega del dinero que portaba en la misma que ascendía a la suma de \$4.000.000 de pesos, huyendo los sujetos del lugar.

Momentos después, aproximadamente a las 12:55 horas, los 5 imputados ya individualizados, fueron sorprendidos por funcionarios de Carabineros de Chile en calle Dorsal con Luis Salas Romo, de la misma comuna, a bordo del vehículo marca Lexus, PPU FJJK39, infringiendo las medidas adoptadas por la autoridad de salud, en el contexto de estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con fecha 18 de marzo de 2020, por ende poniendo en peligro la salud pública.

Al momento de ser fiscalizados, los funcionarios policiales sorprenden al imputado SEBASTIAN ALEJANDRO VELIZ VILLABLANCA, portando y manteniendo en su poder un ARMA DE FUEGO, TIPO REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE . 32 LONG, MADE IN BRAZIL, SERIE NRO. ML27412, CON EMPUÑADURA DE MADERA Y EN EL INTERIOR DEL CILINDRO 06 MUNICIONES MARCA CBC, CALIBRE 32 S & WL, sin contar con las autorizaciones legales requeridas para tal





efecto, arma y municiones que se encuentran aptas para el disparo y para ser percutidas. Además en el vehículo se encontró una de las armas blancas utilizadas y en poder del imputado JORGE LUIS SIERRA MELO, encontraron el dinero de propiedad de la víctima.”.

Sostuvo el Ministerio Público que los hechos relatados se califican jurídicamente como constitutivos del delito de robo con violencia e intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal en relación con el artículo 432 y 439 del mismo cuerpo legal, e Infracción Al Artículo 318 del Código Penal, ambos en grado consumado, en el que les ha correspondido participación a los acusados en calidad de autores en los hechos materia de esta acusación.

**Quinto:** Que, en este sentido debe tenerse presente que el vicio aducido por el recurrente, dice relación expresamente con la omisión del requisito previsto en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, que trata de un tema de valoración de la prueba y la determinación del hecho acreditado, cuyo parámetro aparece establecido en un mandato legal al sentenciador en el artículo 297 del Código Procesal Penal, norma que fija un sistema de libertad en la apreciación de la prueba, con la sola exclusión de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

**Sexto:** Que, en relación al reproche en que se sustenta el arbitrio en estudio aparece pertinente recordar que las leyes universales de la lógica que se presentan como necesarias al raciocinio exteriorizado, como garantía de su corrección, están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y de la derivación.

De la coherencia, entendida como la concordancia que ha de existir entre los elementos del pensamiento, se deducen los principios de identidad, de la no contradicción y del tercero excluido.

A su vez, de la derivación, que es concebida como una regla que expresa que cada pensamiento debe provenir de otro con el cual está relacionado, se extrae el principio de razón suficiente, según el cual, para ser verdadero, todo juicio necesita de una razón suficiente. En términos más comunes, nada es porque sí, sino que debe estar suficientemente fundado.

De lo reseñado es posible colegir que una motivación fáctica podrá ser calificada de lógica cuando se sujeta a las reglas para el recto entendimiento humano exteriorizado. Por ende, debe ser coherente, de modo que podrá tacharse de defectuosa si es incongruente, contradictoria, equivoca o ambigua y, además, debe ser derivada, vale decir, es menester que se encuentre constituida por inferencias razonables, deducidas de las pruebas y de la sucesión de datos extraídos de las probanzas.



**Séptimo:** Que, el considerando octavo de la sentencia que se revisa, contiene el análisis de la prueba rendida en el juicio y los razonamientos que llevaron a los sentenciadores a absolver a los encartados.

De la atenta lectura de dicho fundamento, se advierte la existencia de algunos yerros que llevan a que la conclusión a que se arriba no esté lo suficientemente cimentada en elementos probatorios que la respalden.

En efecto, del análisis de la prueba aportada al proceso, se encuentra acreditado el delito de robo con violencia e intimidación en perjuicio de la víctima, estando cuestionada la participación de los acusados en tal ilícito. De los cinco imputados detenidos, tres de ellos fueron condenados en procedimiento abreviado, reconociendo su participación en los hechos.

Por otra parte, al momento de la detención de los imputados, se encontró en su poder el dinero sustraído, el revólver y cuchillo utilizado para intimidarlo. A su vez, la detención de los encartados se produjo a pocos minutos de ocurrido el robo, y uno de los acusados, Fernández Cortes, fue reconocido como aquel individuo que había estado en el banco al tiempo que la víctima retiraba el dinero, que posteriormente le fue sustraído.

Se advierte en el estudio de los sentenciadores que, más que examinar la prueba efectivamente rendida en el proceso y darle el valor probatorio correspondiente, justifican su razón en circunstancias y elementos que no formaron parte de ella, desconociendo que en la especie se trató de una hipótesis de flagrancia, en que la víctima reconoció a los encartados que lo intimidaron y a aquel que estuvo en el banco junto a él momentos antes del robo.

**Octavo:** Que, por otra parte, en esta línea de razonamiento y al tenor de lo que prevé el artículo 297 del Código Procesal Penal, cabe razonar que el sustento del fallo analizado, no cumple los mandatos que al efecto consagran las normas citadas, desde que no se aprecia una valoración de la prueba acorde con los antecedentes del proceso, existiendo una contravención al principio de razón suficiente, coincidiendo en este caso con el reproche que realiza el ente persecutor en su libelo de nulidad.

**Noveno:** Que, ante la falta de sustento del fallo que se revisa, al carecer de la racionalidad que se requiere para apoyar la decisión de absolución, ésta Corte, acogerá el vicio de nulidad invocado y retrotraerá la causa al estado de realizarse un nuevo juicio por un tribunal no inhabilitado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se acoge** el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, por la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal y se invalida tanto la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, pronunciada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, como la audiencia de juicio y

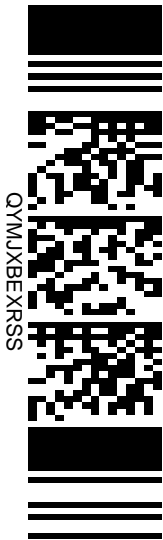


se retrotrae la causa al estado de efectuar un nuevo juicio oral, por tribunal no inhabilitado.

**Regístrese, comuníquese y devuélvase la competencia.**

Redactó la ministra señora Melo.

**Penal N°3787-2022.**



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Maria Soledad Melo L. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, doce de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

